

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 26 de noviembre de 2020

Auto Interlocutorio No. 102

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:	76001-33-33-019-2018-00117-01
DEMANDANTE:	YUNIOR ONESIS ANGULO
DEMANDADA:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES –
ASUNTO	AUTO ACEPTA IMPEDIMENTO DEL JUEZ 19 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

El señor YUNIOR ONESIS ANGULO a través de apoderado judicial, acude en demanda ante esta jurisdicción contra la INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, para que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previa inaplicación del artículo 1° del Decreto 0382 de 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 00683-2017-DG del 10 de noviembre de 2017, suscrito por el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual no se pronunció de fondo sobre las pretensiones del demandante.

Dicho proceso fue asignado inicialmente al juez 19 administrativo del Circuito de Cali, para surtir el trámite en primera instancia, quien manifestó impedimento para conocer en primera instancia del presente asunto, argumentando que se encuentra incurso dentro de la causal consagrada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso¹, y quien textualmente dijo:

“(…)
En el caso que hoy ocupa la atención del despacho, es de advertir que me asiste un interés indirecto en las resultas de este proceso, propuesto por el señor Yunior Onesis Angulo, configurándose de esta forma la causal contenida en el inciso numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, dado que el litigio gira en torno al reajuste y pago de todas las prestaciones sociales, incluyendo en su base de liquidación la bonificación judicial establecida en el Decreto No. 0383 de 2013, por lo que el objeto de la prestaciones versa sobre un aspecto de régimen salarial que fue aplicado a la Rama Judicial con la expedición del decreto en mención, considero que el suscrito funcionario así como todos los jueces administrativos de este circuito nos encontramos impedidos para conocer del asunto, puesto que la decisión recae sobre un aspecto del régimen salarial que nos rige y que tiene consecuencias jurídicas en la liquidación de nuestras prestaciones.

¹ “Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso...”



En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, remito el presente expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca para lo de su competencia ”

CONSIDERACIONES

Competencia

Este Tribunal es competente para conocer del impedimento manifestado por el juez segundo administrativo oral de Buga, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 del CPACA, que prevé:

Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...)

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.

El caso concreto

Descendiendo al caso bajo estudio, la Sala considera que las pretensiones del demandante van encaminadas a que, se le reconozca en los mismos términos que ocurre con los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por ser el Instituto Nacional de Medicina Legal un ente adscrito a la Fiscalía y ser parte de la Rama judicial conforme a lo dispuesto en la Ley 938 de 2004 que en su artículo 33 indica:

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”

Haciendo un análisis comparativo de la situación en que están inmersos tanto los empleados de la Fiscalía General de la Nación, acorde a lo contemplado en el Decreto 382 de 2013 en cuanto al carácter de la bonificación judicial, el cual pretende que se tenga en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, como para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial a los cuales se les ha establecido una estipulación jurídica similar según lo contenido en el Decreto 383 de 2013.

En ese orden de ideas, debe señalarse que en el presente asunto se discute el carácter salarial de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 382 de 2013, para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, la cual también fue creada para los servidores públicos de la Rama Judicial, mediante el



Decreto 383 de 2013 en idénticos términos, pues dichos preceptos priman sobre la misma proposición jurídica para el reconocimiento de la aludida bonificación, es decir, en ambos casos se reconoce mensualmente.

Acotando el caso la parte demandante está pidiendo que se le reconozca que la bonificación que fue creada para los empleados de Rama Judicial, en los Decretos precitados, también le sea reconocida por ser empleado de un ente adscrito a la Fiscalía General de la Nación.

Bajo el anterior panorama, debe señalarse que el Consejo de Estado² sostenía en un principio que las disposiciones que regulaban el tema salarial de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, no se relacionaban con las normas aplicables a los funcionarios de la Rama Judicial.

No obstante, dicha Corporación en un pronunciamiento reciente³, cambio su postura, declarándose impedida la Sala Plena de la Sección Segunda de esa Corporación para conocer del asunto, en el que la actora, quien se encontraba regulada por el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación, pretendía el reconocimiento de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factor salarial, a efectos de que se ordenara la reliquidación de sus prestaciones sociales con base en dichos emolumentos y la correspondiente indexación.

El Alto Tribunal explicó que, como quiera que la actora estaba regulada por el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, que contempló la denominada «*prima especial, sin carácter salarial*»; por consiguiente, se encontraba contemplada en una disposición diferente a aquella que contempló dicho emolumento para los Magistrados, pues de ello se ocupó el Legislador a través del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.

Ahora bien, el actor por ser un empleado del Instituto Nacional de Medicina Legal el cual pertenece a la Rama Judicial como ente adscrito a la Fiscalía General de la Nación, solicita el reconocimiento y el respectivo pago de la bonificación judicial a que tienen derecho los demás funcionarios y empleados de las instituciones mencionadas, es decir, que el litigio versa sobre un aspecto del régimen salarial que fue aplicado en la Rama Judicial con la expedición de los decretos 0382 y 0383, razón por la cual se aceptará e impedimento manifestado y se dará aplicación al numeral 1º del artículo 131 del CPACA⁴

² Sección Segunda – Providencia del 02 de diciembre de 2015, No. Interno 4417-2015, con ponencia de la Consejera SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, demandante: José Joaquín García, demandado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION, que declaró infundado el impedimento propuesto por los Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

³ Sección Segunda- Providencia veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03375-01(2369-18), con ponencia de la Consejera SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, Actor: Martha Lucía Olano Guzmán, Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

⁴ (...)

“El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-33-33-019-2018-00117-01
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
: YUNIOR ONESIS ANGULO
: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES



Así mismo, se configura la causal de impedimento manifestado por el juez 19 administrativo de Cali, sobre la totalidad de los jueces administrativos del mismo circuito, debido a que tendrían un interés indirecto en las resultas del proceso, por lo que se debe proceder, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 131 del CPACA, a que por la Presidencia de esta Corporación se realice el sorteo del conjuer al que se le asignará el conocimiento de la demanda.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento formulado por el juez 19 administrativo de Cali, extensivo a los demás jueces administrativos de Cali, para conocer el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR que por medio de la Presidencia de esta Corporación se realice el sorteo para el nombramiento del conjuer que conocerá el presente asunto.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Los Magistrados,

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

PATRICIA FEUILLET PALOMARES

en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

VoBo Secretario
Hefer

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-33-33-019-2018-00117-01
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
: YUNIOR ONESIS ANGULO
: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

